

# NEOEXTRACTIVISMO Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA. UNA DISCUSIÓN DESDE FRANCIA

## **\_Dossier**

**Presentación.** Martín Mitidieri.

**¿Abajo la minería o abajo el Estado?**

Maëlle Mariette y Franck Poupeau.

**¿Existe el extractivismo progresista?**

Patrick Guillaudat.

**Neoextractivismos latinoamericanos.  
Contrasentidos de una crítica a destiempo.**

Maëlle Mariette y Franck Poupeau.

# Neoextractivismos latinoamericanos. Contrasentidos de una crítica a destiempo <sup>1 2</sup>

Por Maëlle Mariette\* y Franck Poupeau\*\*

## La Doxa del “neoextractivismo progresista”

Un artículo publicado recientemente en *Le Monde Diplomatique*<sup>3</sup> según parece ha suscitado el descontento de diversos especialistas de la ecología política<sup>4</sup> en América Latina. Más que responder a los contrasentidos a los que dio lugar<sup>5</sup>, nos concentraremos aquí sobre los errores de lectura en los que se sustenta el descontento, en particular respecto a los “gobiernos progresistas” que fueron elegidos en el continente desde comienzos de los años 2000. Si bien el artículo



1. Se trata de una traducción de Martín Mitidieri para los Cuadernos del CEL, del texto original titulado “Néo-extractivismes latino-américains. Une critique à contretemps”, publicado en *Contretemps*, con fecha del 27 de noviembre de 2021.

2. [nota del traductor] El título original comporta un juego de palabras con la revista en la cual se publicó. La traducción privilegió omitir esta referencia y explorar el sentido argumental del título para los autores, en parte explicitado hacia el final del artículo.

3. [nota del editor] En este dossier se encuentra la traducción al español de este artículo, escrito también por Maëlle Mariette y Franck Poupeau.

4. [nota del editor] Aquí los autores hacen referencia a dos artículos, el de Patrick Guillaudat, que se publica también en este dossier, y el de Thomas, F. (2021). “Le socialisme n’est pas compatible avec l’extractivisme”, *Contretemps*, 23 de septiembre de 2021, para el cual, a nuestro conocimiento, no existe traducción.

5. No daremos lugar a la mala fe que consiste en desacreditar un artículo, polémico en algunos puntos, asimilándolo a los posicionamientos de autores que no son citados (Ignacio Ramonet, Maurice Lemoine), a propósito de dirigentes y regímenes que no son analizados en el artículo (Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela).

\* Maëlle Mariette es periodista de *Le Monde Diplomatique* especializada en América Latina.

\*\* Franck Poupeau es investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) asociado al Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS), investigador del Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques (CREDA), Doctor en sociología por l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) y autor de *Altiplano. Fragments d’une révolution (Bolivie, 1999-2019)* editado por *Raisons d’agir* en 2021, entre otras obras.



de *Le Monde Diplomatique* destacaba algunas dimensiones “radical chic” de la crítica “revolucionaria” hacia esos gobiernos, así como la visión idealizada de las luchas medioambientales que la acompañan, focalizaba principalmente en la *doxa* tanto académica como política que la sustenta. Lo que aquí se examina son estos presupuestos, en apariencia *indiscutibles* para quienes trabajan las controversias actuales sobre las políticas “neoextractivistas”. El objetivo es entender en qué medida los *impensables* de esta crítica —que se reivindica auténticamente “de izquierda”— constituyen un obstáculo tanto para comprender las lógicas socio-económicas como la politización de la cuestión.

El objetivo del artículo de *Le Monde Diplomatique* no era tomar por objeto la “crítica del extractivismo en América Latina” ni de hacer un “elogio de las políticas extractivistas de los gobiernos ‘progresistas’ latinoamericanos”. Se centraba en la crítica del “neoextractivismo” (y no solo del extractivismo), un término utilizado para designar aquello que será, según algunos autores, la expresión actual de una práctica neoliberal en un gobierno de izquierda. Curiosamente, y con cierta mala fe, la cuestión de la “crítica al neoextractivismo” se transforma en algo así como una defensa del extractivismo y de los gobiernos que en principio no han podido dejarlo atrás. Una breve revisión del neoextractivismo en América Latina se revela necesaria para comprender cómo las transformaciones globales del capitalismo y de la gestión de los recursos naturales son analizadas del Sur al Norte.

De hecho, la crítica al neoextractivismo ha emergido hacia fines de los años 2000 de parte de autores latinoamericanos que retomaron la denuncia de despojo colonial del continente, popularizado por el libro *Las Venas abiertas de América Latina* de Eduardo Galeano, y que de a poco se alejaron de los regímenes progresistas de los cuales habían sido inicialmente cercanos (Alberto Acosta en Ecuador, Maristella Svampa en Bolivia, etc.). Esto les permitió pronunciarse contra los “compromisos” de los gobiernos de izquierda, al tiempo que se ganaban reconocimiento internacional, en una extraña inversión de las “astucias de la razón imperialista”<sup>6</sup>. Esta crítica ha sido retomada ampliamente en los trabajos académicos sobre América Latina, ahora se da por sentada y ya no se discute, al punto que la citación misma se toma como prueba. La noción de extractivismo es definida por el intelectual uruguayo Eduardo Gudynas como “un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”<sup>7</sup>. Esta noción no se aplica solo a los gobiernos conservadores que ponen en práctica políticas neoliberales, sino también a los gobiernos progresistas que llegaron al poder en América Latina en los años 2000, y que tuvieron una voluntad de transformación social con “un papel más activo del Estado”<sup>8</sup>, con el objetivo de reducir las desigualdades. Pero se dice que estos países desarrollaron, en contra de lo que reivindicaban, un “neoextractivismo progresista”, es decir, políti-

6. Bourdieu, P. & Wacquant, L. (2000). “La nouvelle vulgate planétaire”, *Le Monde diplomatique*, mayo 2000: <https://www.monde-diplomatique.fr/2000/05/BOURDIEU/2269>

7. Gudynas, E. (2013). “Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales”, *Observatorio del Desarrollo*, n°18, p.3.

8. Gudynas, E. (2009). “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, *Extractivismo, política y sociedad*, Quito, Centro Andino de Acción Popular (CAAP) / Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), p.188.

cas de gestión de recursos “mediante la nacionalización de empresas y de las materias primas, la revisión de los contratos y el aumento de las cuotas de exportación y de impuestos”, y a utilizar “los excedentes para (...) asegurar el desarrollo nacional y la soberanía, reducir la pobreza, aumentar la participación social, diversificar las economías locales y garantizar la estabilidad política”<sup>9</sup>.

En realidad, según Eduardo Gudynas, el “Estado compensatorio” que acompaña las políticas neoextractivas “acepta el capitalismo y considera que sus efectos negativos pueden ser rectificadas o amortiguados”<sup>10</sup> en la creencia de que están aprovechando el auge del mercado mundial de materias primas para financiar sus ideales de justicia social y redistribución. Los gobiernos progresistas habrían vuelto así a formas obsoletas de desarrollo, que se opondrían a lo que el intelectual venezolano Edgardo Lander denomina «las nociones del «buen vivir» (sumak qamaña, sumak kawsay) originarias de los pueblos indígenas andinos y amazónicos», que han sido «incorporadas a las luchas por la defensa de los territorios, contra los monocultivos, los transgénicos y la minería»<sup>11</sup>. La noción de neoextractivismo se convirtió de este modo en una especie de prueba para descalificar a los gobiernos progresistas de América Latina. Ampliamente asumida por activistas y académicos de Norte a Sur, también es instrumentalizada por las oposiciones de derecha latinoamericanas que valorizan sin escrúpulos la causa ecológica dentro de las disputas políticas nacionales.

9. Burchardt, H.-J. & Dietz, K. (2014). “(Neo-)extractivism – a new challenge for development theory from Latin America”, *Third World Quarterly*, 35(3), p. 470.

10. Gudynas, G. (2012). “Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano”, *Nueva Sociedad*, 237, p. 142.

11. Lander, L. (2017). “Neoextractivismo: Debates y conflictos en los países con gobiernos progresistas en Suramérica”, En Héctor Alimonda et al. (coord.) *Ecología política latino-americana: pensamiento crítico, diferencia latino-americana y rearticulación epistémica*, vol.II, Buenos Aires, CLACSO, p.82.

En cuanto al uso de la noción de «neoextractivismo» por parte de una de las autoras de esta crítica, la socióloga Maristella Svampa, —cuyas investigaciones (tempranas) sobre Argentina siguen siendo una referencia<sup>12</sup>, pero cuyas (últimas) extrapolaciones sobre el conjunto de América Latina e incluso sobre el «capitalismo global», con la ayuda de la noción de «neoextractivismo», se vuelven confusas ya que pretenden englobar desde la crisis planetaria hasta el patriarcado<sup>13</sup>— podemos criticar tanto su pretensión “analítica” como su ambición “movilizadora”.

### Instrumentalización política

La crítica a la crítica (del «neoextractivismo») iniciada en el artículo de *Le Monde Diplomatique* se produce en varios niveles. En primer lugar, un nivel político: las declaraciones de los opositores a los gobiernos progresistas no pueden ser borradas tan fácilmente de la disputa política, y se puede discutir hasta el cansancio sobre la revolución y su pureza antiextractivista, éstas son como la “prueba del pudding” según Engels: existen. En cuanto a uno de los líderes de la causa ecologista contra las empresas mineras en Ecuador, Yaku Pérez, su hostilidad hacia el ex presidente Rafael Correa le llevó a impulsar el voto nulo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, lo que, según muchos observadores, contribuyó a la elección del candidato de derecha (el banquero Lasso), que había quedado muy por detrás de su oponente correísta en la primera vuelta. A continuación, se evocaron rápidamente sus posturas públicas (¿o se evacuaron?) para excusarlo (¿para disculparse?). Sin embargo, es la derecha, o más bien la ultraderecha, la que se ampara en

12. Ver por ejemplo el libro de Maristella Svampa y Mirta Alejandra Antonelli (eds.) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Buenos Aires, Biblos

13. Svampa, M. (2019) *Las fronteras del neoextractivismo en América latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*, Bielefeld University Press.



la causa ecológica para derribar a los llamados gobiernos progresistas, en Ecuador y en la región.

Podríamos citar el caso de Pablo Solón en Bolivia, que negó el Golpe de Estado de noviembre de 2019 y cuyas declaraciones fueron retomadas por un sinnúmero de activistas altermundistas occidentales. La «carta abierta al movimiento antiglobalizador<sup>14</sup> sobre la situación en Bolivia», que hizo circular por el mundo entero, es reveladora de la forma en que ciertas figuras públicas utilizan la autoridad previamente adquirida en otros ámbitos (en este caso, en la causa ecologista que defendían aquellos gobiernos progresistas y cuyas posiciones estas figuras compartieron, antes de convertirse en sus críticos más acerbos y, por momentos, los más histéricos), y tienden a monopolizar la palabra para imponer una visión un tanto unilateral de las configuraciones políticas locales —y una condena muy poco calificada de las políticas «de izquierda». Esto no significa que la causa ecologista carezca de valor, pero se habría esperado un mínimo de argumentación, y no disculpas parciales (sobre la deriva de un individuo como Yaku Pérez), para evitar borrar los efectos políticos de la toma de ciertas posiciones públicas.

¿Cómo construir una alternativa política con ambiciones democráticas frente a una oposición que no sólo no respeta las reglas del juego democrático, sino que recupera descaradamente los principios (ecología, democracia, etc.) que llevan adelante las luchas emancipadoras? Sobre este punto: silencio; o mejor, la única respuesta posible es una retórica descalificadora (reduccionismo político: «si la derecha está a favor, es porque está mal»). Esta forma de esquivar el problema de la instrumentalización política permite a la crítica del neoextractivismo minimizar las declaraciones —bien reales por cierto— de los intelectuales críticos del neoextractivismo,

14. [Nota del traductor] el autor utiliza la palabra “altermondialiste”, fiel al título de la carta en su versión francesa. Aquí respetamos el término “antiglobalizador” por la versión de esta carta en español.

en favor de Yaku Pérez. O los silencios de los mismos intelectuales tan «radicalmente revolucionarios» sobre el gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia, sobre los intentos de usurpación democrática de Juan Guaidó en Venezuela, sobre las medidas ultraliberales de Lenín Moreno en Ecuador y de Mauricio Macri en Argentina, etc. Es sin duda más «lúcido» y simbólicamente más «rentable» poner a los gobiernos progresistas o a los candidatos de izquierda<sup>15</sup> en el centro de las críticas, como lo demuestra la denominación del período como «fin de ciclo»<sup>16</sup>. La pertinencia de estos términos debe ser cuestionada a la luz de lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia con el regreso del MAS al poder, en Perú con el inesperado triunfo de Pedro Castillo, en Chile con un clima favorable a una izquierda más combativa, en Argentina con el regreso del peronismo de izquierda, y en Brasil donde Lula da Silva ha vuelto a la primera línea de la escena política.

Como consecuencia de estos sesgos que se superponen, nunca se discuten las similitudes entre el programa político de Yaku Pérez y las políticas económicas de inspiración neoliberal. Tampoco se discute sobre la venia dada al banquero Lasso por parte de los intelectuales pro-Yaku Pérez respecto a su agenda extractivista/neoliberal. Una vez más, sólo los gobiernos progresistas —y sólo los gobiernos progresistas— son el objetivo. Más allá del caso ecuatoriano, la cuestión ambiental permite realineamientos que van más allá del simple desencanto con los progresistas en el poder, y que expresan una verdadera indulgencia respecto a las fuerzas reaccionarias

15. Así, durante las elecciones del 2021 en Perú, las críticas de universitarios “de izquierda” a Castillo hacían prácticamente olvidar el programa ultraliberal de la hija del exdictador Fujimori, que se le oponía en la segunda vuelta electoral: <https://www.contretemps.eu/elections-perou-neoliberalisme-fujimori-gauche-castillo/>

16. Para un análisis crítico de esta temática, ver Bringel, B. y Falero, A. (2016). “Movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado en América latina: transiciones, conflictos y mediaciones”, *Caderno CRH*, 29(3).

que a veces se evocan como un «mal» al que podríamos resignarnos, en relación al «mal» que encarnarían los progresistas: la postura de Alberto Acosta, que literalmente los pone en la balanza, está lejos de ser marginal. Creer que el caso Yaku Pérez es un epifenómeno sería un grave error de análisis.

### Errores analíticos (1): Rechazar por principio al Estado

El segundo nivel de la crítica es analítico: lo que está en juego es la objetividad del diagnóstico hecho sobre estos gobiernos llamados progresistas a la luz de esta crítica. Los errores aquí son de varios órdenes: pueden ser factuales como también complacerse en simples distorsiones. Lo que se pone en evidencia en el artículo de *Le Monde Diplomatique*, y que los comentarios no parecen querer entender, es que la crítica del neoextractivismo se niega a mencionar toda una dimensión de la acción reguladora de estos gobiernos. No es defender ciegamente los intentos de regulación decir que esta crítica contribuye a esconder ciertas dimensiones constructivas de las acciones de transformación social —y que con ello se impide apreciar todo un abanico de alternativas políticas impulsadas, a menudo laboriosamente, pero siempre en contextos hostiles, por estos mismos gobiernos<sup>17</sup>. ¿No es esto justamente lo que las fuerzas conservadoras quieren evitar: que se apliquen y se piensen al mismo tiempo esas alternativas al desarrollo capitalista?

Nos acercamos al corazón de la discusión: el rechazo al Estado. Basta con citar un texto de Miriam Lang<sup>18</sup> (pro-

fesora de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador), sobre los «desafíos de la transformación social en América Latina», que condensa este tipo de posturas, la mayoría de las veces implícitas. El problema no es tanto la negativa a reconocer cualquier dimensión positiva de todas las iniciativas llevadas a cabo durante los años progresistas (incluso la reducción de la pobreza se ve sólo como un alineamiento con las normas de consumo occidentales). Tampoco lo es la ausencia casi total de referencias a las oposiciones (de derechas), como si las experiencias progresistas hubieran ocurrido en un vacío social, carente de limitaciones políticas (incluida la necesidad de revalidar su acción en elecciones democráticas). El principal problema de este punto de vista es reducir todo a la responsabilidad estatal. O más bien, pensar el Estado sólo de manera unilateral<sup>19</sup>, como una subversión necesaria del proyecto emancipador de las instituciones que impulsan el cambio «desde arriba». De allí proviene el elogio paradójico de parte ciertos «instrumentos» neoliberales del período anterior, puestos en marcha para dismantelar las estructuras públicas de la región. Este sesgo conduce a una visión espontánea e inquestionable de la política: «en el contexto progresista, el retorno del Estado ha significado gobernar lo más posible, mientras que en términos de emancipación social, probablemente habría que hacer lo contrario: gobernar lo menos posible y dejar que las organizaciones sociales desarrollen sus responsabilidades en la gestión de sus

17. Encontraremos en el libro de Franck Poupeau, *Altiplano. Fragments d'une révolution. Bolivie 1999-2019* (Paris, Raisons d'agir, 2021), críticas a Evo Morales formuladas desde el 2006, en una época en que los futuros teóricos del neoextractivismo iban por los pasillos de los palacios presidenciales de los gobiernos progresistas haciendo entrevistas que vislumbraban el cambio social.

18. Lang, M. (2021). "Le cycle progressiste et ses contradictions", En Gaudichaud, F. & Posado, T. (dir.), *Les Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018). La fin d'un âge d'or*, Rennes, PUR.

19. En oposición a las visiones homogeneizantes del Estado en América Latina, citaremos particularmente a Centeno, M. y Ferraro, A. (2013). "Papers Leviathans: Historical Legacies and State Strength in Contemporary Latin America and Spain". En Centeno, M. & Ferraro, A. (eds.), *State and Nation Making in Latin America and Spain. Republics of the Possible*, Cambridge, Cambridge University Press; a Kurtz, M. (2013). *Latin American State Building in Comparative Perspective. Social Foundations of Institutional Order*, Cambridge, Cambridge University Press; a Saylor, R. (2014). *State Building in Boom Times. Commodities and Coalitions in Latin America and Africa*, Oxford, Oxford University Press; y a Soifer, H. (2015) *State Building in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.



respectivos territorios»<sup>20</sup>.

Si bien no es pertinente generalizar el modelo de Estado de bienestar europeo para América Latina<sup>21</sup>, podemos cuestionarnos sobre la poca atención que se presta a los proyectos llevados adelante por los gobiernos progresistas para fortalecer la acción estatal<sup>22</sup>. En el análisis, estos son interpretados como copias del desarrollismo cepalino bajo un modelo extractivista. ¿Alcanza analizarlos sólo en función de la tasa de exportación de materias primas? ¿Los procesos nacionales de industrialización, y las dimensiones políticas alternativas, no son dejados de lado bajo una lectura de tinte economicista? ¿Qué sentido tiene hablar del «Estado» en términos tan generales, cuando habría que distinguir la multiplicidad de esferas del campo burocrático, y la distinción de las formas de acción pública, que implica diferencias en términos de temporalidad y resultados?

Los efectos políticos de esta crítica despiadada del neoextractivismo llevan a errores analíticos que son perjudiciales al momento de pensar no solo una “alternativa revolucionaria” al capitalismo, sino más modestamente, a los procesos de transformación que acontecen en América Latina. Cabe destacar la poca atención (y la escasa mención) al trabajo de campo realizado por los investigadores, tanto latinos como europeos, sobre estos temas<sup>23</sup>. Lo que revelan muchas investigaciones de

las ciencias sociales sobre los conflictos ambientales<sup>24</sup> es que estos conflictos son mucho más complejos que el simple enfrentamiento entre las comunidades indígenas «buenas» y las empresas multinacionales «malas». Realmente hay que no haber hecho terreno nunca en un yacimiento minero para dejarse encantar por una visión tan binaria, y por la «ejemplaridad» de tales conflictos — repetidos una y otra vez en documentales, en los libros de Anna Bednik y en los artículos de Eduardo Gudynas. Es por esto que la discusión entre extractivismo y neoextractivismo molesta: matizar las condenas binarias no es defender la apertura de una megaminería ni aceptar la contaminación que puede producir la industria extractiva. Se trata de intentar salir de un maniqueísmo que apunta sólo a ciertos protagonistas de los conflictos, y al hacerlo, decir que estas críticas no dan cuenta de la aceptación de la minería por grandes sectores de la población<sup>25</sup>. Sin embargo, un especialista del tema señala en otro lugar que «El imaginario desarrollista está fuertemente anclado en las organizaciones, incluso en las de izquierda, y los trabajadores de las grandes ciudades suelen verse menos afectados por el impacto medioambiental que genera la minería»<sup>26</sup>. Siendo América Latina el continente más urbanizado, podemos entender la medida en que los sindicatos de trabajadores han podido apoyar la explotación de recursos naturales, a razón de

20. M. Lang, “Le cycle progressiste...”, art. cit., p. 249.

21. Para una compilación de las ideas generalizadas sobre el Estado, en parte importante de la sociología latinoamericana consagrada a las “Epistemologías del sur”, ver: Santos, B. S. (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*, Lima, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad/ Programa Democracia y Transformación Global/ GTZ/ Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, Fundación Ford.

22. Así, el hecho de reducir un resultado obtenido de una investigación a un simple “micro trote” revela la voluntad de descalificar el trabajo de campo en los yacimientos mineros del continente, desconocidos por la mayoría de los críticos del neoextractivismo.

23. Omitiremos también el hecho de argumentar sobre los gobiernos progresistas con datos específicos de Colombia, o bien de avanzar una consulta popular que estuvo organizada por Yaku Pérez en su “pro-

pia cancha”, con el sesgo de difusión que eso implica y que no puede ser considerado como “representativo” o “ejemplar” de las luchas medioambientales del continente.

24. Ver por ejemplo: Bebbington, A. y Bury, J. (2013). *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*, Austin, University of Texas Press.

25. Si algunas comunidades rurales en Bolivia descansan en una economía agro-minera, y esto explica la adhesión a algunos proyectos extractivistas, debemos también tomar en cuenta, en otros contextos sociales, los procedimientos empresariales descritos en Giraud, G. y Renouard, C. (2010). “Mesurer la contribution des entreprises extractives au développement local. Le cas des pétroliers au Nigéria”, *Revue française de gestion*, 208-209.

26. Thomas, F. (2013). “Exploitation minière au Sud : enjeux et conflits”, *Alternatives Sud*, 20(7), p.26.

los puestos de trabajo que genera, el miedo a la crisis y a enfocar su lucha en la (única) relación capital/trabajo, en detrimento de la causa ecológica. Por tanto, el reto no es abogar por una ruptura radical (y sobre todo verbal) con el desarrollo extractivista, y rechazar a los trabajadores por clientelistas. Sino incluir las aspiraciones e intereses de las poblaciones en un proyecto político coherente, donde no se pida a las clases trabajadoras y a los países del Sur que financien, por sí mismos, la transición ecológica y el fin de la dependencia económica respecto a los combustibles fósiles<sup>27</sup>, ya que esto implica renunciar a cualquier mejora de sus condiciones materiales de existencia en nombre de un «ecologismo de los ricos»<sup>28</sup>.

Por otro lado, lo que aprendemos de las investigaciones de campo realizadas con cierta rigurosidad (y en una temporalidad más larga que las observaciones generalmente realizadas por activistas), es que si bien es cierto que en varios casos los gobiernos progresistas no han respetado el derecho de los pueblos a decidir sobre el establecimiento de actividades mineras en sus territorios (y esto sigue siendo injustificable), la reducción del conflicto al antagonismo entre comunidades indígenas y Estado al servicio de las multinacionales oscurece la diversidad de intereses y los protagonistas que están en juego, lo que debería alentarnos a revisar profundamente las grillas de análisis que comúnmente adoptan. Así, el conflicto que tuvo lugar a principios de la década de 2010 en torno a la mina Mallku Khota en el norte de Potosí en Bolivia, si bien tiene sus raíces en el rechazo a la empresa canadiense South American Silver y la falta de consulta con las comunidades indígenas, presenta

una configuración mucho más compleja<sup>29</sup>. En un principio, el descubrimiento de grandes depósitos de indio y plata alienta a las aldeas circundantes a desarrollar un proyecto de creación de una empresa comunitaria para explotar estos nuevos recursos. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Federación de Ayllus Originarios e Indígenas del Norte de Potosí (FAOINP), sin embargo, levanta en un primer momento la oposición de organizaciones campesinas cercanas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que están a favor de una nacionalización de la empresa canadiense. Posteriormente, las comunidades indígenas forjan una alianza con las cooperativas mineras locales para favorecer el acceso material al yacimiento que beneficiaría a toda la región, abandonando así las demandas ecologistas e indigenistas en favor de la construcción de una coalición más amplia. Sin embargo, esta alianza entre grupos locales se ve comprometida por las organizaciones nacionales a las que pertenecen estos grupos —CONAMAQ para los nativos, FENCOMIN para los cooperativistas— que muestran públicamente sus desacuerdos sobre esta nueva versión del proyecto. La explotación es finalmente confiada a la empresa minera pública nacional (Comibol), optando el gobierno por poner fin a un conflicto que los actores económicos, políticos y sociales, locales y nacionales, ya no son capaces de «regular» ellos mismos.

En lugar de elaborar una lista de todos los conflictos que no entran en el marco de la crítica del neoextractivismo (y la oposición binaria simplificadora que establece entre las comunidades indígenas y las empresas extranjeras apoyadas por el Estado), podemos observar los sesgos analíticos que resultan: de esta manera, las medidas de

27. Al respecto, ver lo dicho por Huber, M. en "Repenser le *Green New Deal*: la nécessaire rupture stratégique de la nouvelle gauche étasunienne", *Contretemps*: <http://www.contretemps.eu/?s=read+o+ine+29819+green+new+deal+gauche+e>

28. Poupeau, F. (2020). "Ce qu'un arbre peut vraiment cacher. Chanter l'âme des forêts ou cultiver l'environnementalisme des riches ?". *Le Monde diplomatique*, septiembre de 2020.

29. Le Gouill, C. (2016). "Imaginaires miniers et conflits sociaux en Bolivie : une approche multiniveaux du conflit de Mallku Khota". *Cahiers des Amériques latines*, 82, URL : <http://cal.revues.org/4337>.



redistribución social llevadas a cabo por los gobiernos progresistas se reducen a lógicas clientelares con un objetivo electoral<sup>30</sup>. El énfasis en la redistribución sería, según Eduardo Gudynas —quien sin embargo reconoce ciertos «avances sociales»—, una «trampa asistencialista» cuyo efecto sería no solo acostumar a las poblaciones a ayudas que obstaculizan su autonomía, sino también lograr tener su consentimiento respecto a proyectos que garanticen la mejora de los niveles de vida<sup>31</sup>. Sólo la «pureza» de las comunidades indígenas les permitiría escapar a una corrupción como aquella: esta crítica establece, en palabras de Frédéric Lordon, una «nueva etapa de la historia»<sup>32</sup>, enfrentando a los malvados gobiernos progresistas contra los buenos defensores del planeta o, en términos de Bruno Latour, a los «Extracteurs» contra los «Ravaudeurs» que se supone que «reparan» el daño —¿quién puede estar en contra de causas tan justas?

## Errores analíticos (2): el ocultamiento de las transformaciones contemporáneas de los modelos extractivistas.

La transformación de esas posiciones morales en criterios analíticos presenta otros inconvenientes: oculta las transformaciones contemporáneas de las maneras de

explotar los recursos naturales. No importa, por ejemplo, que la principal salida de las exportaciones de hidrocarburos de un país como Bolivia sea Brasil y no China, que muchos artículos sitúan convenientemente como el origen del «mal». Pero no es necesario para llevar esta crítica a afinar los análisis, alcanza con denunciar el consenso de las commodities, propio a Maristella Svampa, así como el supuesto aumento de la producción minera vinculado a la demanda internacional (de China) y la suba de los precios de las materias primas entre 2008 y 2014. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores en el análisis de los modelos extractivistas contemporáneos. Existe una enorme bibliografía sobre el tema, a la que los críticos del neoextractivismo no hacen mayor referencia —¿quizás complejizaría la imagen de los «malvados» gobiernos autoritarios que «traicionaron la revolución»?— Por ejemplo, fue posible mostrar los vínculos entre la extracción de fuentes de energía y los regímenes políticos, como lo hace Timothy Mitchell en *Carbon Democracy*<sup>33</sup>. Esta incrustación de la política en las infraestructuras técnicas habría permitido complejizar las afirmaciones que toman sin medida la crítica del neoextractivismo, como que «los países hiperextractivistas tienden a ser hiperpresidencialistas»<sup>34</sup>, o «más extractivismo, menos democracia»<sup>35</sup> que sirven para afirmar que los gobiernos progresistas están dispuestos a emprender cualquier forma de «criminalización» de los líderes indígenas para defender su principal fuente de financiamiento<sup>36</sup>. Pero

30. Esta oposición binaria simplificadora conduce finalmente a que las poblaciones locales abracen los discursos ecologistas para buscar aliados necesarios en sus luchas asimétricas contra las empresa (en busca de empleo, compensaciones sociales, etc.), listas a plegarse a la imagen del «buen indígena» para satisfacer a las ONG y encontrar aliados. Con esta puesta en escena de la oposición comunidad/empresa, las ONG y otras asociaciones militantes no actúan allí donde podrían ser realmente eficaces para las comunidades (principalmente en la relación capital/trabajo, o las relación a la agricultura, etc.).

31. Para una mirada un poco más compleja de las políticas sociales en América Latina, ver por ejemplo: Altman, D. y Castiglioni, R. (2019). «Determinants of Equitable Social Policy in Latin America (1990-2013)», *Journal of Social Policy*, 49(4); y también: Ciccía, R. & Guzmán-Concha, C. (2021). «Protest and Social Policies for Outsiders: The Expansion of Social Pensions in Latin America», *Journal of Social Policy*. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0047279421000623>

32. Ver a Frédéric Lordon en «Face au désastre qui vient: le communisme désirable», emisión «On s'autorise à penser» (18/03/2021): <https://www.youtube.com/watch?v=sBLwC6BQX-s>.

33. Mitchell, T. (2011). *Carbon Democracy. Political Power in the Age of Oil*, Londres, Verso.

34. Gudynas, E. (2018). «Países hiper extractivistas tienden a ser hiper presidencialistas». *Página Siete*, 0/09/2018: <https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/9/9/eduardo-gudynas-paises-hiperextractivistas-tienden-ser-hiperpresidencialistas-193267.html>

35. Svampa, M. (2016). *Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo*. Buenos Aires, Edhasa.

36. Los gobiernos progresistas han reprimido a veces movimientos contrarios a sus proyectos de modernización, pero rara vez se mencionan situaciones en las que algunos dirigentes estaban interesados

esto habría exigido que la crítica del neoextractivismo se centrara en los detalles de estas relaciones y adoptara otros ángulos de análisis<sup>37</sup>—algo que no puede hacer si toma a todas las formas de explotación de los recursos naturales (minería, hidrocarburos, agroindustria, etc.) bajo una única noción—<sup>38</sup>.

Tampoco se mencionan las transformaciones tecnológicas (robotización, geoexploración, etc.) que afectan no sólo a los modos de extracción, sino también a la configuración de los territorios de producción extractiva, y en particular a las redes de infraestructuras relativamente dispersas pero conectadas (corredores transoceánicos, circuitos financieros, reorganización de las relaciones laborales, etc.), como describe Martín Arboleda en *Planetary Mine*<sup>39</sup>. Sin caer en el determinismo de una “Cuarta Era de la Máquina” en el sentido que reconfigura la

en conservar sus privilegios heredados de períodos neoliberales anteriores. También hay que señalar que los críticos del neoextractivismo aprovechan del carácter indefendible de estos incidentes para poner del mismo lado conflictos socioambientales y asesinatos de líderes ecologistas, que se producen principalmente en otros países. De hecho, cada año, la ONG británica Global Witness publica un informe en el que registra el número de asesinatos de ecologistas (a menudo líderes o activistas indígenas) en todo el mundo. La mayoría de los textos que denuncian el neoextractivismo utilizan estos asesinatos como prueba en su contra. Sin embargo, un examen más detallado de las cifras del informe de la ONG de 2017, así como de las de años anteriores y posteriores, revela que los asesinatos se producen principalmente no en los países del llamado «neoextractivismo progresista», sino en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú y, por supuesto, Brasil (que es un caso especial por su historia y su dominio corporativo sobre la Amazonia). En efecto, la ONG sostiene que muchos crímenes ocurren en conflictos nacidos de la oposición a proyectos mineros y petroleros, pero lamentamos la confusión que suscitan los críticos del neoextractivismo que mezclan voluntariamente casos de conflictos ambientales en territorios cuya gestión es responsabilidad de gobiernos progresistas, con países donde los crímenes contra activistas ambientales se caracterizan por su lógica sistémica y su carácter masivo.

Ver: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/land-and-environmental-defenders-annual-report-archive/>

37. Ver por ejemplo, en una perspectiva comparativa: Filer, C. & Le Meur, P.-Y. (2017). *Large-scale Mines and Local-level Politics*, Canberra, ANU Press.

38. Aquí una síntesis, Mitchell, T., Charbonnier, P. & Vincent, J. (2018). “Étudier les infrastructures pour ouvrir les boîtes noires politiques”. Entretien avec Timothy Mitchell, En *Tracés. Revue de Sciences humaines*, 35: <http://journals.openedition.org/traces/8499>.

39. Arboleda, M. (2020). *Planetary Mine*, Londres, Verso, 2020. Ver también Ballester Riesco, B. & Richard, N. (2021). *Cargar y descargar en el desierto de Atacama*, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural / IHEAL.

economía global, cada vez es más difícil considerar a los Estados como responsables, o al menos como intermediarios y cómplices del gran capital. El sector cooperativo minero, por ejemplo, ha sabido eludir los intentos de regulación estatal que los gobiernos progresistas han intentado implementar<sup>40</sup>. Los críticos del neoextractivismo simulan descubrir los megaproyectos mineros (que caracterizan a toda la época contemporánea) y los convierten en una oportunidad para concientizar a la población<sup>41</sup> (recurriendo siempre a los mismos ejemplos, más o menos romantizados), mientras que las técnicas a cielo abierto, por ejemplo, han proliferado desde principios del siglo XX (sobre todo en Estados Unidos, donde se inventó la técnica), y su implantación en Sudamérica, que lleva varias décadas, no tuvo que esperar a los gobiernos progresistas para desarrollarse<sup>42</sup>. Este discurso catastrofista contribuye a ocultar el hecho de que ahora pasamos a otra etapa de la minería<sup>43</sup>, más tecnificada que nunca; que los proyectos de minería sostenible y de responsabilidad social corporativa (véase el recuadro siguiente) que acompañan estos cambios tienden a evitar los conflictos ambientales en el sentido de las luchas contra los megaproyectos; y que la resistencia tiene que basarse en normas ambientales y herramientas legales que son mucho más complejas de lo que sugiere la moral antiminera<sup>44</sup>.

40. Encontramos bibliografía sobre el tema en Poupeau, F. (2021). *Altiplano. Fragments d'une révolution (Bolivie, 1999-2019)*, Paris, Raisons d'agir.

41. Ver por ejemplo Svampa, M. & Viale, E. (2014). *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*, Buenos Aires, Katz Editores.

42. La diferencia es que la necesidad de mano de obra no calificada es más débil, más que el hecho que los trabajadores de megaproyectos recientes vengan de otras regiones o del extranjero, y que los pobladores de comunidades no tienen acceso al empleo (lo que modificó el conflicto clásico capital/trabajo en las minas).

43. Owen, J. & Kemp, D. (2017). *Extractive Relations: Countervailing Power and the Global Mining Industry*, London, Routledge.

44. Boyer, A.-L., Le Gouill, C., Poupeau, F., Ramirez-Andreotta, M., & Rañamahefa, L. (2019). “Sustainable mining and political participation in semi-arid areas of Western United States: lessons from the Rosemont case study”, *Regional Climate Change*, 19(2); Le Gouill, C. & Pou-

## Las transformaciones en el sector minero y las estrategias empresariales

A lo largo del siglo XX el sector minero se vio afectado por profundos cambios técnicos, que se han intensificado en los últimos veinte años. Mientras que la cuestión minera durante las economías de enclave se orientaba principalmente hacia las relaciones entre empresas y mineros, actualmente las actividades extractivas ponen en juego a una multiplicidad de instituciones (Estados, empresas, comunidades, redes de militantes, etc.). Por un lado, continúan las tensiones históricas entre capital y trabajo respecto al reparto de la renta, y en torno a las externalidades de la actividad (desarrollo, empleo, contaminación, corrupción, etc.), al tiempo que surgen nuevas preocupaciones sobre «sostenibilidad» y «modernización ecológica». Por otro lado, la relación histórica paternalista sobre la mano de obra, propia de estas actividades, se ha convertido en una forma de supervisión normativa de las prácticas de «responsabilidad social», lo que permite a las empresas mineras convertirse no sólo en el interlocutor central de los trabajadores, sino también de la población residente<sup>45</sup>. El «después de la mina» se ha convertido así en una cuestión crucial para la aceptación de nuevos proyectos mineros. Así, las empresas extractivas se embarcaron en un proceso de redefinición organizativa y técnica destinado a hacer que sus actividades sean socialmente «aceptables» frente a los desafíos medioambientales, sin

ir en desmedro de su rentabilidad económica<sup>46</sup>. «Minería sustentable» (sustainable mining) y «responsabilidad social de las empresas» (corporate social responsibility) expresan tanto las transformaciones de las actividades extractivas como de las regulaciones medioambientales. Además, la reorganización de las tareas dentro del sector implica la contratación de trabajadores cada vez más calificados que se mantienen en rotación entre los campamentos cercanos a los emplazamientos según el llamado modelo fly-in/fly-out<sup>47</sup>. Este aislamiento del territorio de la producción con la producción misma revela transformaciones específicas: para seguir siendo escuchados, algunos sindicatos han entablado nuevas alianzas con otros sectores de la población y con ONGs fuera de los campamentos; las formas de organización social y de producción de la vida colectiva se ven afectadas a su vez por el desplazamiento de los conflictos de las relaciones de producción hacia las relaciones de compensación de los efectos de las actividades extractivas.

Es mucho más fácil, en este sentido, invocar todos los desastres medioambientales que se están produciendo en muchos países y, por un deslizamiento del sentido, acusar a los gobiernos progresistas como los únicos culpables de estas situaciones. Los artículos de Maëlle Mariette sobre el proyecto estatal del litio, por ejemplo (publicados también en *Le Monde Diplomatique*<sup>48</sup>, nunca se citan en las discusiones. Es cierto, para contradecirlos, habría que ir a visitar los campamentos de litio en el salar de Uyuni, comparar los daños ambientales y económicos que se producen en el proceso boliviano con

peau, F. (2020) "A framework to assess mining within social-ecological systems", *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 44.

45. Bebbington, A. (2012). "Extractive Industries and Stunted States: Conflict, Responsibility and Institutional Change in the Andes", En Raman, R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: Discourses, Practices and Perspectives*, London, Palgrave; Hashwood, H. (2012) *The Rise of Global Corporate Social Responsibility: Mining and the Spread of Global Norms*, Cambridge, Cambridge University Press; Nacif, F. (2015). "Un Estado a la medida del extractivismo. Las políticas de la 'Minería Sustentable' impulsadas en América Latina desde 1990", *Integra Educativa*, VIII(3); Chevrel, S. et al., (2017). *Le concept de « mine responsable ». Parangonnage des initiatives mondiales*, Paris, Ministère de l'Économie et des Finances, BRGM.

46. Kirsch, S. (2014). *Mining Capitalism: The Relationship Between Corporations and Their Critics*, Berkeley, UCP.

47. Manky, O. (2017). "From Towns to Hotels: Changes in Mining Accommodation Regimes and Their Effects on Labour Union Strategies", *British Journal of Industrial Relations*, 55(2); Storey, K. (2010) "Fly-in/Fly-out: Implications for Community Sustainability", *Sustainability*, 2.

48. Mariette, M (2020). "En Bolivie, la filière lithium à l'encan", *Le Monde diplomatique*, enero de 2020.

los que se producen del otro lado de la frontera, en Chile, y entrevistar a los trabajadores de los campamentos, o a los habitantes de las comunidades vecinas. También en este caso, la crítica del neoextractivismo se regodea en peticiones de principios, sin vínculo con la realidad ni con algún trabajo de campo<sup>49</sup>.

Sin embargo, varios investigadores latinoamericanos —que no son los más citados por los críticos del neoextractivismo— han estudiado en detalle el papel regulador del Estado en Bolivia a través de los intentos de industrialización del litio<sup>50</sup>. Su explotación responde a las reivindicaciones de soberanía nacional e industrialización de los recursos naturales, formuladas en la «Agenda de Octubre», que se desprende de los movimientos sociales tras la «guerra del gas» de 2003<sup>51</sup>, y que sirvió de plataforma programática al partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), para las elecciones presidenciales de 2005, que finalmente ganó.

Desde su llegada al poder, Evo Morales defiende la idea de una extracción «100% nacional» de litio, del cual el país posee la mayor reserva del mundo. Su ambición es exportar litio no en su estado puro, sino con valor agregado, transformado en baterías producidas localmente. Si lo consiguiera, Bolivia se convertiría en uno de los pocos países del Sur que se hace cargo de la totalidad de

la cadena industrial (exploración, extracción, elaboración de compuestos, fabricación de productos, etc.). En 2008, el gobierno boliviano inició un plan nacional para industrializar los llamados recursos evaporíticos (litio, sobre todo, pero también otros minerales presentes en la salmuera, como el potasio, el boro, etc.) bajo el control de una empresa nacional, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), desarrollando su propia tecnología, para no depender de empresas multinacionales y patentes extranjeras. Para lograrlo, el Estado desembolsa cerca de mil millones de dólares, una de las inversiones más importantes de la historia del país. YLB cuenta actualmente con varias fábricas en el salar de Uyuni: una planta de producción de cloruro de potasio (un subproducto de litio), otra de fabricación de carbonato de litio (por el momento piloto y a escala industrial a fines del 2021) y un complejo de investigación y testeo sobre el estudio de los recursos evaporíticos, los materiales catódicos y las baterías, que se encuentra en una fase avanzada y es único en la región<sup>52</sup>.

En la condena inapelable que se desprende de los críticos del neoextractivismo, otros sectores de la producción se encuentran totalmente invisibilizados. Así, la Empresa de Ayuda a la Producción de Alimentos (Emapa), una estructura estatal creada en el 2007, aporta una ayuda monetaria a los pequeños agricultores, con la intención de equilibrar su competencia con la agroindustria del Oriente boliviano. Este dispositivo está destinado a estabilizar el mercado interior de los productos agrícolas, comprando la producción de los pequeños y medianos agricultores (arroz, trigo, maíz, etc.) a precios superiores a los del mercado, y obliga a los agro-agricultores industriales a ofrecer remuneraciones más justas y a alinear sus precios<sup>53</sup>.

49. Por otro lado, la repetición de una cita de Franck Poupeau sobre el peligro de un retorno a las formas de Estado, que en *Les Mésaventures de la critique* (2012) se refería a otros contextos, intenta equiparar la referencia a las regulaciones estatales en el artículo de *Le Monde diplomatique*, de nuevo, con un retorno a las formas cepalistas de desarrollo, de forma un tanto abreviada.

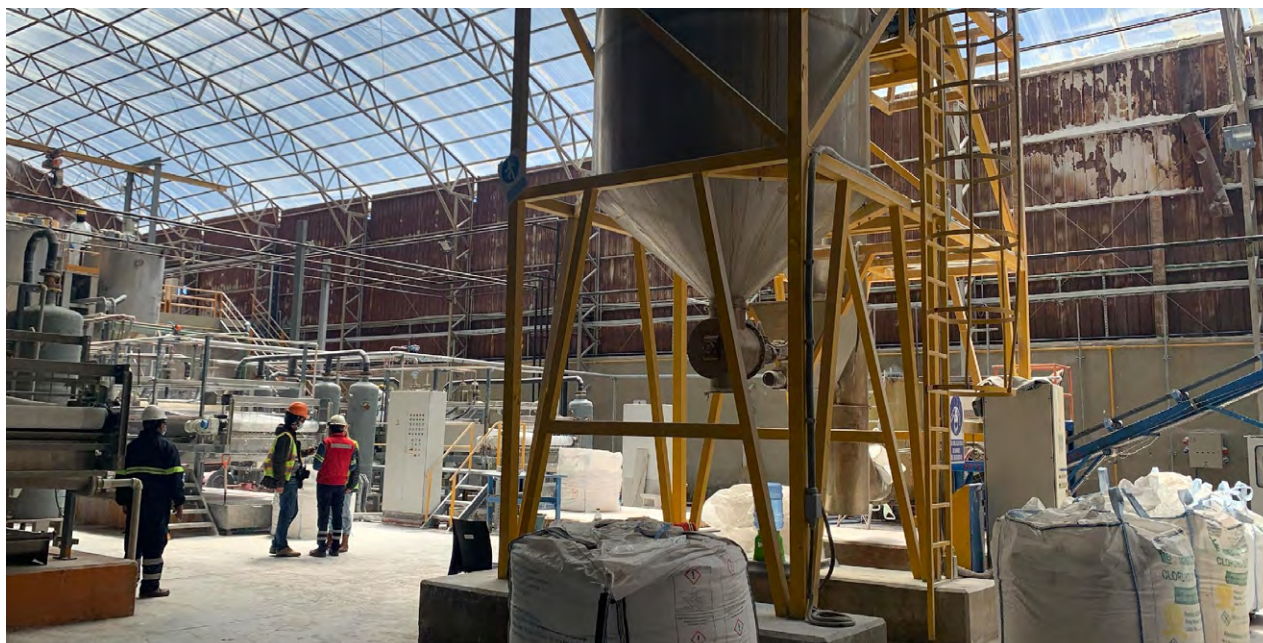
50. Ver, entre otros: Nacif, F. (2018). "El abc del litio sudamericano. Apuntes por un análisis socio-técnico", *Revista de ciencias sociales*, 34; Rodríguez, A. & Aranda, I. (2014). "De la salmuera a la batería: Soberanía y cadenas de valor. Balance de la política de industrialización minera en el Gobierno del MAS (2006-2013)", CIS-PNUD.

51. En octubre de 2003 las manifestaciones contra un proyecto de exportación de gas boliviano a Chile fueron violentamente reprimidas, con un saldo de casi 70 muertos en la ciudad de El Alto. Los cortes que siguieron, encabezados en particular por las juntas de vecinos de la ciudad y las principales organizaciones sindicales, hicieron que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada huyera a Estados Unidos.

52. Mariette, M. (2021). "Maîtriser ses ressources. Les enjeux de l'industrialisation du lithium bolivien", *Cahiers des Amériques Latines*, 96, 2021/1. En línea: <https://journals.openedition.org/cal/>

53. Mariette, M. (2019). "En Bolivie, mérites et limites d'une 'révolution'





Estas políticas públicas han facilitado la comercialización de los productos agrícolas en el mercado interno, en un contexto en el que muchas comunidades rurales siguen privilegiando las actividades mineras o el comercio informal por ser sectores más rentables. Si la reforma agraria prevista por la Constitución no pudo llevarse a cabo, se debe tener en cuenta también un elemento de contexto raramente mencionado: el poder de un sector agro-industrial al cual es mucho más difícil oponerse de lo que pretenden los críticos de la regulación estatal. En general, no hay datos proporcionados por la crítica del neo-extractivismo progresista sobre las políticas públicas de apoyo a la demanda interna, sobre la mejora necesaria de la infraestructura y de los servicios básicos, los créditos productivos o la creación de empresas nacionales. Ciernen sus análisis sobre las estadísticas de la CEPAL, pero no incluyen las estadísticas del Banco Nacional de Bolivia<sup>54</sup>. De ellas se desprende que el peso de las actividades no extractivas en el PBI boliviano pasó

de menos del 5% a casi el 33% en los años 2010. Tampoco consultaron sobre los tipos de sectores productivos estudiados por una institución tan poco favorable al gobierno, como lo es el Banco Ganadero, para constatar la progresiva diversificación de la economía boliviana.

¿Quién, en la comodidad moral (y el conformismo lógico) de las condenas sin apelación asestadas por los críticos del neoextractivismo, mencionará tales dispositivos públicos en materia agrícola, o incluso la creación del centro de investigación sobre el litio ya mencionado, así como la voluntad de preservar una soberanía intelectual sobre las innovaciones industriales atentas a sus efectos sobre sus entornos inmediatos? ¿Quién prestará atención, más allá del dogma del “boom de los commodities”, al declive de los pozos de gas natural en Bolivia (en el 2021 la producción es un 28% inferior a la del 2014), y a los compromisos concretos en la transición hacia energías renovables, con la instalación de 300.000 paneles fotovoltaicos repartidos en 214 hectáreas en la ciudad de Añatunga en el Altiplano boliviano<sup>55</sup>? Todas estas ten-

pragmatique”, *Le Monde diplomatique*, septiembre 2019: <https://www.monde-diplomatique.fr/2019/09/MARIETTE/60349>.

54. Ver: <https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N8.pdf>

55. El país dispone de una capacidad instalada para generar aproximadamente 3800 MW, mientras que el consumo interno alcanza apenas 1600 MW. Los proyectos de exportación de electricidad hacen parte de los objetivos del gobierno, pero tienen otro sentido que aquel

tativas de construcción de alternativas políticas no figuran en las críticas a los gobiernos progresistas. Pero poco importa para la radicalidad revolucionaria. Cualquier cosa que hagan los gobiernos progresistas está mal porque es el Estado. Las bicicletas de bambú de Yaku Pérez, en cambio, nunca dejan de entusiasmar.

Por lo tanto, las acusaciones sobre la represión violenta que ejercerían los gobiernos socialistas, calificados de autoritarios, productivistas e insensibles a las consideraciones medioambientales llevadas por los militantes ecologistas y las poblaciones indígenas, constituyen el núcleo de una argumentación que se basa en la distorsión de las cifras o en asimilaciones abusivas relativas a la represión<sup>56</sup>; y que se repone al calor de la exaltación de un ideal de vida en pequeñas comunidades, cercanas a la naturaleza, para encarnar alternativas al desarrollo capitalista. Las capacidades de estas comunidades locales para vivir de forma autónoma no se evalúan ni se mencionan nunca: ¿son autosuficientes y capaces de producir lo suficiente para abastecer a las ciudades (o incluso a las comunidades circundantes)? ¿Cómo podrían hacerse de los recursos necesarios para la construcción de servicios públicos básicos (agua, escuela, electricidad, salud, etc.)? Podríamos, desde esta perspectiva, multiplicar las cuestiones prácticas que los críticos del neoextractivismo se abstienen de mencionar. Nos contentaremos con mencionar las dificultades a la escala local, a la que se limitan la mayoría de los análisis de los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras. Incluso cuando se sitúa el análisis en el centro de los terrenos afectados por las materias primas, vemos que los protagonistas locales



se mueven en espacios políticos donde el ámbito de acción (y de legitimidad) del Estado es cuestionado, movilizado y recompuesto<sup>57</sup>, y en el que cada vez es más difícil atenerse a una visión “desarrollista” de las autoridades públicas. Del mismo modo, las empresas extractivas no están “en el aire”, y sus anclajes territoriales implican redes de intermediación que vuelven difíciles los análisis en términos de “enclaves”, y que pueden reforzar los procesos de “estatalización” de los territorios afectados<sup>58</sup>.

Esta reestructuración de las lógicas entre Estados, empresas y población, que puede llevar a las autoridades a constituirse en garantes de las inversiones privadas, corresponde bien al proceso de “descargo”<sup>59</sup> que facili-

que le atribuyen los críticos del neoextractivismo. Ver “Bolivia apuesta a producir energía eléctrica ante agotamiento del gas por falta de inversión”, *El Deber*, 26/10/2021: [https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-apuesta-a-producir-energia-electrica-ante-agotamiento-del-gas-por-falta-de-inversion\\_252618](https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-apuesta-a-producir-energia-electrica-ante-agotamiento-del-gas-por-falta-de-inversion_252618)

56. Ver nota 33.

57. Ver la editorial del número “Entreprises ancrées, États en jeu ?”, *Politix*, 132, 2020.

58. Grajales, J. & Vadot, G. (2020). “Entreprises, territoires et pouvoirs politiques: localiser l’analyse du capitalisme extractif”, *Politix*, 132. Ver también Kirsch, S. (2014). *Mining Capitalism: The Relationship Between Corporations and Their Critics*, Berkeley, UCP.

59. Hibou, B. (dir.) (2000). *La privatisation des Etats*, Paris, Karthala.





ta la instauración, a menudo autoritaria, de un “Estado intermediario”, centrado en la ingeniería financiera de proyectos de desarrollo. Se ve el interés que hay aquí en atender los intentos de romper con estas lógicas de atracción de capitales extranjeros reforzando las regulaciones nacionales. En lugar de servir a las lógicas del capital de “menos Estado” (que se acompañan paradójicamente del fortalecimiento de sus funciones autoritarias), se trata de llevar las luchas socioambientales al corazón mismo de las estructuras estatales.

Permaneciendo en una visión arcaica del Estado desarrollista, la crítica del neo-extractivismo no puede comprender el hecho de que los movimientos de protesta «no se sitúan necesariamente en una ruptura radical con la actividad minera o agroindustrial, sino que, por el contrario, a menudo se sitúan en un continuo con otras formas de acción colectiva que buscan acomodarse y sacar provecho de la presencia de la empresa. Esto puede crear desajustes cognitivos y políticos con redes militantes transnacionales que se proponen desafiar las actividades extractivas en nombre de los derechos de las comunidades sobre la tierra y los recursos naturales»<sup>60</sup>.

Aquí se ve el interés de evitar una visión binaria del conflicto entre comunidades y empresas<sup>61</sup>, y de poner la atención sobre las experiencias de desarrollo alternativas llevadas a cabo por los gobiernos progresistas. De esta manera podemos pensar en la ruptura con una cierta defensa de: i) la ecología, que por cierto se revela muy compatible con la ideología liberal por sus rechazos al Estado (patriarcal, opresivo) que se trata de debilitar; ii) la redistribución (asimilada al clientelismo o al asis-

tencialismo), que se trata de sustituir por medidas paliativas de austeridad; y iii) de planificación (sinónimo de burocracia enquistada y corrupta) que abandona a comunidades locales que, a pesar de estar abiertas a las tensiones de la globalidad y la circulación de capitales, sabrían sin embargo autogobernarse.

El problema de este discurso ecologista no es solo su falta de arraigo en las poblaciones de las que se supone transmisor de su palabra. Tampoco lo es la forma en que moviliza, que impacta menos sobre las personas afectadas que sobre un pequeño número de intelectuales, y sus lectores y enlaces militantes que, en coloquios, seminarios web y tribunas, proclaman la necesidad de “volver a los valores primitivos” y a la Pachamama. El problema, y es preciso insistir en este punto, es ocultar en una condena unívoca e inequívoca las alternativas políticas que los gobiernos progresistas han intentado aplicar, con mayor o menor éxito, en contextos políticos y geopolíticos a menudo muy desfavorables<sup>62</sup>.

El interés de América Latina es por tanto evitar las soluciones encarnadas en las comunidades indígenas idealizadas a nivel local, y de resituar la cuestión de las traducciones concretas de estas alternativas a nivel de la acción estatal o de integración regional. Sobre este punto, los acuerdos recientes entre Argentina, Bolivia y México sobre el litio constituyen una ilustración pertinente (también omitida por los críticos del neoextractivismo). Desde esta perspectiva, sigue siendo sorprendente ver a los críticos del neoextractivismo ignorar los contextos políticos y geopolíticos en los que actúan los gobiernos, más allá del aumento del precio de las materias primas —que nunca ha significado un aumento automático de la producción. Este ocultamiento no está exento de efectos.

60. Grajales, J. y Vadot, G. “Entreprises, territoires et pouvoirs politiques...”, art. cit., p.10.

61. Para estas perspectivas ver Allen, M. (2018). *Resource Extraction and Contentious States. Mining and the Politics of Scale in the Pacific Islands*, Singapour, Palgrave-Macmillan.

62. Hay que considerar la presión de las derechas y de sus medios de comunicación, pero también la de los poderes internacionales y los dispositivos que pueden poner en acción para mantener su influencia o aquella de las firmas multinacionales de las que son a menudo el enlace, con ayudas al desarrollo y mediante servicios de cooperación.



### Errores analíticos (3): vacío social y el problema de no cuestionar las fuentes.

En primer lugar, la acción de los gobiernos progresistas se considera de forma totalmente incorpórea: ¿es necesario recordar que los intentos de (re)construir el Estado se llevaron a cabo en estructuras públicas devastadas por las políticas neoliberales? ¿O en un contexto en que las derechas y las élites a las que representaban, no tenían la intención de renunciar a sus privilegios adquiridos? ¿Es necesario mencionar el contexto boliviano entre el 2006-2009, donde, desde el bloqueo institucional hasta el «golpe cívico», las oposiciones frenaron cualquier intento de transformación social? ¿Debemos traer a la memoria los episodios similares de Ecuador, Venezuela o Brasil? ¿Es prudente, entonces, repetir indiscriminadamente las acusaciones de autoritarismo que lanzaron estas derechas, contra los intentos de los gobiernos progresistas de sortear los obstáculos legales e ilegales con los que sistemáticamente se encontraron? De nuevo: es más gratificante (aunque paradójico) abogar por una mayor radicalidad revolucionaria y no ensuciarse las manos. En segundo lugar, sorprende la facilidad con la que se toman argumentos de cualquier tipo. En este caso, las recomendaciones y —fundamentalmente— las estadísticas de la CEPAL, organismo internacional cuyas ambigüedades ideológicas nunca son mencionadas por los críticos del neoextractivismo, de quienes asumen sus informes sin tomar ninguna distancia, en lo que respecta a las exportaciones o a la inversión privada. Sin embargo, Fernando Leiva ha mostrado claramente los sesgos que produce la CEPAL y que busca, incluso en su tentativa posneolibe-

ral de rehabilitar las instituciones de los años 90, conciliar desarrollo, competitividad, flexibilidad y democracia<sup>63</sup>.

Son trabajos que dan prioridad a la tasa de exportación de materias primas. Esto se entiende porque los Anuarios Estadísticos de la CEPAL y otras publicaciones (también disponibles en línea) prestan poca atención a las transformaciones en los sectores de la actividad económica. Por ejemplo, no consideran para el caso boliviano, durante la segunda mitad de la década de 2010, la creciente importancia de la industria manufacturera y la administración pública, o la disminución del aporte que hacen los hidrocarburos al PBI nacional. Esta información puede encontrarse en estos repositorios de forma más resumida que en los informes nacionales. Sin embargo, es menester que los análisis de los investigadores consideren esta dimensión, lo que no suele ocurrir<sup>64</sup>. Un mínimo de cuidado epistemológico respecto a los «datos» empleados, y a su construcción, habría permitido a los críticos del neoextractivismo progresista evitar un sesgo intelectual muy extendido: la circulación circular de fuentes. Cuando Jeffery Webber necesita justificar una afirmación sobre el carácter colonial de los gobiernos progresistas, se remite a Maristella Svampa, cuyo texto se basa en uno de los innumerables ensayos breves de Eduardo Gudynas, cuya evidencia se basa a su vez en una conferencia pronunciada por Edgardo Lander en la que fustiga al Estado chavista-madurista de Venezuela por la puesta en marcha de nuevas explotaciones mineras en el río Orinoco —a pesar de que la explotación allí se remonta al siglo XIX—, y para apoyarlo teóricamente (porque tampoco hay que remitirse demasiado a lo «em-

63. Leiva, F. (2008). *Latin American Neoliberalism. The contradictions of Post-Neoliberal Development*, Minneapolis, The University of Minnesota Press.

64. Ver *Estudio Económico de América Latina y el Caribe* : <https://www.cepal.org/es/publicaciones/44674-estudio-economico-america-latina-caribe-2019-nuevo-contexto-financiero-mundial>.



pírico»...), Lander se refiere a un autoridad del «Norte»... Jeffery Webber. Por tratarse de un círculo de pensadores a los que les molesta el carácter polémico de un artículo de *Le Monde Diplomatique*, es sorprendente encontrarlos tan pocos exigentes científicamente con autores (y textos) cuyas opciones políticas comparten incondicionalmente, o que ellos mismos producen a una velocidad a la que pocos científicos —tanto del Norte como del Sur— están acostumbrados.

Podríamos seguir señalando, línea por línea, los errores de lectura, las deformaciones y las aproximaciones de las «respuestas» al artículo de *Le Monde Diplomatique*, que ni siquiera es seguro que fueran realizadas efectivamente, y señalar los lugares comunes afirmados con tanta convicción, y tan poca evidencia. Sin embargo, este tedioso ejercicio tiene sus límites, ya que se realiza sin la esperanza de convencer realmente a los comentaristas que aquí se interpela. Estas opiniones sólo pueden publicarse con tanta certeza si los autores no leyeron el artículo de *Le Monde Diplomatique*, del que no dicen, finalmente, nada, sino los anatemas (reduccionismo, cepalismo, etc.) que sirven a sus tentativas de descalificación. Podemos preguntarnos por aquello que motiva estas reacciones epidérmicas, e instantáneas, o más exactamente, preguntarse por aquellas razones por las que no pudieron leerlo.

### **Una negación político-académica**

Hay aquí un aspecto fundamental (e impensado) en la crítica del neoextractivismo: el término «fondo de comercio» es sin duda demasiado burdo para denominar los nichos académicos y políticos en los que se difunde dicha crítica. Necesitaríamos una verdadera sociología de los intelectuales y de sus diferentes relaciones con el campo político a ambos lados del Atlántico para entender las razones de las tomas de posiciones. El hecho es que hoy en día es mucho más redituable —sobre todo

en las universidades nacionales o en las redes científicas mundiales— criticar a los gobiernos de izquierda, hacer balances invariablemente negativos, y sacar lecciones moralizantes, que intentar analizar sus dificultades y errores (muy reales), reconociendo sus avances, sin ser calificados de cierta ingenuidad dogmática.

Que la crítica irradie la buena conciencia militante: hay que mantener la memoria y la esperanza activas en las luchas. Que se encuentre el término “extractivismo” en cualquier tesis de doctorado de ciencias sociales sin una mirada crítica, es mucho más problemático en la medida en que se trata de introducir a las ciencias sociales en las luchas simbólicas por imponer una visión legítima del mundo social, y de darles una validez científica, especialmente si tal término es tomado como una garantía de lucidez, cuando solo es la huella de una doxa tan prepotente que ya no es cuestionada —lo que precisamente define a la doxa—. La particularidad de la doxa que la acumulación de discursos críticos sobre el neoextractivismo acaba por constituir, es situarse en el cruce de lo académico y lo político: que se quiera ponerla en perspectiva política, da lecciones de ciencia, mientras que si se discuten los fundamentos analíticos, se responde (con tweets) en el plano político: “¡Colonialismo! ¡Imperialismo!”.

Desde entonces, las lecciones de moral política y de ciencia establecidas por las críticas al neoextractivismo aparecen por lo que son: negaciones apresuradas en torno a certezas, adquiridas lenta pero certeramente. Intentos de reducir argumentos divergentes bien contruidos para disimular propuestas bien aceptadas para no convertirse ellas mismas en la caricatura de una doctrina (demasiado) bien anudada (el consenso de los commodities, las tasas de exportación de las materias primas, la criminalización de las resistencias, etc.). Lo decíamos en el artículo de *Le Monde Diplomatique*: la crítica del neoextractivismo funciona como la negación freudiana: nunca



se equivoca. Es difícil contradecir tal sistema de defensa, y es sobre todo ilusorio esperar llevar la convicción de manera poco racional. Frente a la dura realidad de la instrumentalización política, y de las aproximaciones analíticas aquí apuntadas, la crítica del neoextractivismo no tiene más argumentos que anatemas —estatista (o estalinista), correísta, evista, chavista, ortegista, madurista, etc. —destinados a impedir toda posibilidad de debate<sup>65</sup>. Mientras tanto, las multinacionales del cobre y de los metales raros siguen promulgando sus normas ambientales de Minería Sustentable y Responsabilidad Social Empresarial, y siguen imponiendo su dominio sobre todo el sector minero. Pero no, la crítica del neoextractivismo no tiene la impresión de equivocarse de objetivo: le alcanza, como dice Lordon, con “llorisquear la naturaleza” y permitir que las fuerzas del mercado actúen al margen del Estado y de las experiencias de gobierno que habría que debilitar a toda costa, fuera de todo contexto. Y es sin duda el mayor contrasentido de esta crítica a destiempo de las realidades socio-históricas que pretende analizar, como de las coyunturas políticas nacionales y globales en las que se inscribe, relegar a un segundo plano los trabajos inmensos<sup>66</sup>, surcados por las tentativas de los

gobiernos progresistas, de llevar adelante alternativas políticas y que sobreviven a las luchas políticas que las han suscitado.

*Fotos de Franck Poupeau / Usina de litio en el Salar de Uyuni*

65. Hay una indignación selectiva entre los seguidores de la crítica del neoextractivismo, ya que no es la primera vez que se producen estos intentos polémicos de descalificación por parte de Eduardo Gudynas: por ejemplo, su crítica al «colonialismo simpático» de David Harvey y su equipo, que constituye uno de sus argumentos. Y, en el siguiente enlace, la respuesta que insiste en el concepto «unidimensional» de neoextractivismo y su falta de utilidad para pensar en las luchas anticapitalistas (todo un conjunto de respuestas y contrarespuestas, más o menos argumentadas, se puede encontrar en el segundo enlace, donde queda claro que a Eduardo Gudynas y a sus seguidores, como Joan Martínez Alier, les exaspera cualquier intento de discusión analítica del concepto de extractivismo): <http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasRomperColonialismoSimpaticoRebellionSet15.pdf>  
<https://lalineadefuego.info/2015/10/13/ni-colonialistas-ni-simpaticos-una-respuesta-a-eduardo-gudynas/>

66. Pensamos, para la Bolivia de 2021, no sólo en el litio o en las energías renovables antes mencionadas, sino en los recientes proyectos de industrialización del Río Mamoré en el Beni, cuyos beneficios económicos y ecológicos no dejarían de abrir una región que permanece, por el conflicto del Tipnis de 2011, sometida al dominio de las élites agroindustriales de Santa Cruz, o en los proyectos de desarrollo alternativo relativos a los recursos alimentarios o forestales del Oriente boliviano.